



TRABAJO FIN DE GRADO

CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO DE RELACIONES LABORALES

CURSO ACADÉMICO 2017-2018

EL PROCESO MONITORIO LABORAL

ORDER FOR PAYMENT IN THE LABOR PROCESS

ITAISA TRUEBA ALLICA

DIRECTOR:

JULIO PÉREZ GAIPO

1. ORIGEN Y DESARROLLO LEGAL DEL PROCESO MONITORIO. LEYES INTRODUCTORIAS Y CARÁCTER SUPLETORIO DE LAS NORMAS DE LA LEC.

Para poder valorar correctamente y queriendo iniciar este trabajo de una forma lógica y ordenada, lo primero que debemos tener en cuenta es el origen de nuestro tema central: el proceso laboral monitorio.

Como leyes introductorias, básicamente podemos decir que el proceso monitorio se introdujo en el ordenamiento procesal español con la Ley 8/1999 de 6 de abril, de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para la reclamación de gastos de la comunidad de propietarios. Poco después, la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) modificó el artículo 21 de la citada Ley de Propiedad Horizontal y generalizó este procedimiento a cualquier otra reclamación.

Este proceso es una de las nuevas medidas introducidas por la Ley 36/2011 de 10 de Octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS), ya que hasta entonces no estaba recogido en la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por Real Decreto 03/03/1881.

En una primera aproximación al proceso monitorio social introducido por esta ley, el artículo 101 (ubicado en la sección 5ª, del capítulo II, del título I, que regula el proceso ordinario y las modalidades procesales), recoge el procedimiento monitorio, cuyo objeto es la reclamación de cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada, que no excedan de los 6.000 euros.

Artículo 101. LRJS (párrafo primero) Proceso Monitorio.- “En reclamaciones frente a empresarios que no se encuentren en situación de concurso, referidas a cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada, derivadas de su relación laboral, excluyendo las reclamaciones de carácter colectivo que se pudieran formular por la representación de los trabajadores, así como las que se impongan contra las Entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social, que no excedan de seis mil euros, cuando conste la posibilidad de su notificación por los procedimientos previstos en los artículos

56 y 57 de esta Ley [...]”

Podríamos decir, para entenderlo mejor, que el proceso laboral monitorio se asemeja en gran medida al proceso monitorio civil, regulado en los artículos 812 a 818 de la Ley 1/2000 de 7 de Enero de la LEC, ya que el objeto del mismo es similar, se recoge que la deuda ha de ser liquida, vencida y exigible, con una cuantía determinada.

Además, a la par que este proceso en el orden laboral se ajusta al aplicado en la jurisdicción social, observamos que ambos también se asemejan en gran medida al modelo de proceso monitorio europeo, Reglamento CE 1896/2006.

Respecto al carácter supletorio de las normas de la LEC, podemos ver que en las disposiciones finales de la LRJS, se reconoce como supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil y en determinados casos, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En lo no previsto en esta Ley regirá como supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en los supuestos de impugnación de los actos administrativos cuya competencia corresponda al orden social será la Ley de la Jurisdicción Contencioso –Administrativa, con la necesaria adaptación a las particularidades del proceso social y cuando sean compatibles con sus principios.

Las lagunas que pudiesen darse de la aplicación práctica de la LRJS, se salvarán con la aplicación de la LEC.

2. NATURALEZA, CONCEPTO Y ASPECTOS ESENCIALES DEL PROCESO MONITORIO. CONDICIONES Y LÍMITES:

“El proceso monitorio laboral que regula el art. 101 LRJS podría ser definido como un procedimiento que discurre generalmente ante el secretario judicial del juzgado o tribunal al que correspondería conocer del asunto si el mismo se plantease mediante demanda iniciadora del proceso ordinario, carente de fase declarativa, destinado a tutelar determinados derechos de crédito de índole pecuniaria y de mediana cuantía que se encuentren debidamente documentados, y cuya esencial finalidad radica en obtener, en el menor tiempo, con el menor coste posible y sin más garantías que la derivada de la propia intervención del secretario de un órgano judicial, un título que permita abrir el procedimiento de ejecución forzosa del derecho de crédito impagado o, en el mejor de los casos, el propio pago de dicho crédito a cargo del deudor”¹.

Para hacer una primera calificación de la naturaleza del proceso monitorio laboral atendiendo a los aspectos esenciales que lo determinan, podemos fijarnos en la comparación que se hace del mismo con los monitorios del sistema alemán e italiano, siendo sus características más significativas las siguientes:

- El monitorio alemán, emite una orden de pago por parte del juzgado, sin la intervención de un Juez en el proceso, y se sustenta exclusivamente en la afirmación unilateral y no probada del acreedor de que se le debe una suma de dinero. En este caso, la mera oposición del deudor, aunque no esté probada, priva de eficacia la orden de pago, como si esta nunca hubiese existido.

- El monitorio italiano, sin embargo, tiene carácter documental, presupone que el juez ha considerado probados los hechos constitutivos de crédito mediante unos documentos aportados por parte del acreedor, por lo que la mera oposición del deudor no priva de eficacia la orden de pago, sino que,

¹ GARBERÍ LLOBREGAT, J, *El nuevo proceso laboral: comentarios a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social*, Cizur Menor: Civitas, 2011, pág. 301.

abre un proceso en el que se debe decidir si la prueba documental inicial tiene fuerza suficiente o no para justificar la oposición del demandado, y con ello, si se debe mantener la reclamación, o por el contrario, se encuentra falto de fundamento y debe ser anulado.

Tras estas consideraciones, si lo comparamos con el sistema español, primero civil y ahora laboral, apreciamos que no se ajusta estrictamente a ninguno de los dos sistemas, lo que ha conducido a que la doctrina lo califique como mixto, ya que se aproxima al documental italiano al exigir que el inicio del monitorio venga acompañado de un escrito debidamente documentado y que sea el juez quién decida el requerimiento de pago, y se separa del mismo, acercándose al alemán, en cuanto a que el documento no tiene por qué llevar a Juez al pleno convencimiento de la certeza de la deuda, sino que simplemente debe servir como mero indicio de prueba de la reclamación económica o como dice la Exposición de Motivos de la LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) de «*buena apariencia jurídica de la deuda*», por lo que la orden de pago no goza de presunción de veracidad.²

Las particularidades que se destacan en nuestro proceso laboral monitorio han sido estudiadas por la doctrina científica examinando los aspectos más significativos de la misma, y a grandes rasgos, sin profundizar acerca de su naturaleza jurídica, podemos destacar las siguientes consideraciones:

Se ha defendido que en el monitorio no se da una verdadera actividad jurisdiccional en la medida en que la labor del juez se ciñe a una mera constatación de la apariencia del derecho contenido en el documento presentado por el acreedor y que sirve únicamente para que se requiera de pago, de ahí que se le considere como un proceso declarativo sumario con predominante función ejecutiva (CORTÉS DOMÍNGUEZ). Además, otros autores resalten su naturaleza declarativa derivada de la necesidad de preparar el título ejecutivo antes de satisfacer la petición del acreedor (GÓMEZ COLOMER).

² PRECIADO DOMÉNECH, C.H., "El nuevo procedimiento monitorio laboral", *Revista Doctrinal Aranzadi Social*, núm. 11, 2012, págs. 1-2.

Por otra parte, hay autores que destacan como característica principal, su carácter de diligencia preliminar que pueden promover los acreedores de los créditos documentados de cuantía determinada con la expectativa de que el requerimiento de pago sea atendido (GARBERÍ LLOBREGAT).

Y por supuesto, no han faltado aportaciones que han abordado el proceso monitorio partiendo de la fórmula técnica que lo caracteriza; se provoca al deudor para que pague su deuda. Si no se mueve o da la callada por respuesta, se entiende que debe. En consecuencia, se provee al acreedor de un título ejecutivo y con él puede iniciar directamente la ejecución sobre el patrimonio del deudor. Si el deudor se opone, el acreedor no tendrá más remedio que iniciar un juicio ordinario (RAMOS MÉNDEZ)³.

Por último, en relación a este carácter especial, debemos destacar la cuestionable ubicación sistemática –dentro del Título I del Libro II relativo al proceso ordinario- del juicio monitorio laboral, que descarta su consideración como modalidad procesal en sentido estricto a pesar de contar con una regulación procedimental propia plasmada en los distintos apartados del artículo 101 de la LRJS, y muy similar a la seguida en la LEC, si bien, en esta norma el monitorio ha merecido el tratamiento de proceso especial, incluyéndose el monitorio en el capítulo I, del Título III del Libro IV, dentro de los procesos especiales (arts. 812-819).

Si analizamos estas apreciaciones, podemos decir que no se encuentra discrepancia alguna en cuanto a que el proceso monitorio es de carácter especial, ya que no coincide con las reglas generales recogidas en el Capítulo II, aunque se incluya en el mismo, y no es extrapolable a las reglas del proceso ordinario: demanda, contestación, reconvención, etc.; tiene una clara naturaleza declarativa, con función ejecutiva.

Continuando con el estudio realizado a lo largo del tiempo sobre este proceso, sí que observamos discrepancias entre quienes lo consideran un proceso como tal, y los que defienden que su estructura no es de un proceso

³ CHOCHRÓN GIRÁLDEZ, A.M., “El proceso monitorio laboral”, *Relaciones laborales*, núm. 1, tomo 1, 2013, págs. 1-2.

en sí, sino que se trata más bien de un procedimiento. En este caso, aunque los autores que citábamos anteriormente coinciden en que se trata de un proceso, hay quienes discrepan bajo las siguientes premisas: Si entendemos por proceso, el instrumento constituido por una serie de actos por el que, mediante su atribución a un órgano jurisdiccional, se pretende la resolución de un conflicto de intereses mediante la actuación del Derecho objetivo, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado; y entendemos por procedimiento la consideración meramente formal de una actuación judicial, que regula la forma, tiempo y sujetos de tal actuación; se constata que el monitorio no reviste naturaleza de proceso pues el mismo no alberga conflicto alguno, ya que cuando éste se produce, en el momento que el deudor se opone al requerimiento de pago, se da traslado a la parte actora, que puede, en los cuatro días siguientes presentar ante el Juzgado de lo Social, demanda que dará inicio al autentico proceso (art. 101 e) LRJS)⁴.

Todo lo expuesto anteriormente, se completa con los rasgos esenciales definitorios del proceso monitorio, que son básicamente:

1º. Carácter no jurisdiccional. Pese a su denominación, el proceso monitorio difícilmente puede ser catalogado como un verdadero “proceso”, teniendo en cuenta que la intervención en él de la autoridad judicial es poco menos que inexistente, ya que, de la admisión de la petición monitoria no se encarga un juez o un tribunal, sino el Letrado de la Administración de Justicia (art. 101.b) LRJS), que es al que corresponde también realizar el requerimiento de pago al deudor, y es el que toma la decisión de dar por terminado el proceso monitorio, ya sea en caso de pago del crédito o en caso de oposición (art. 101.c) LRJS), o bien en aras a su conversión en un proceso laboral ordinario (art. 101.e) LRJS).

Teniendo en cuenta esto, es perfectamente posible que este trámite se inicie, discurra y finalice en su totalidad sin que en él se produzca la más mínima intervención judicial, razón por la cual, no cabe afirmar que este “proceso” cuente entre sus notas esenciales con la de la jurisdiccionalidad.

⁴ PRECIADO DOMÉNECH, C.H., “El nuevo procedimiento monitorio laboral”, *Revista Doctrinal Aranzadi Social*, núm. 11, 2012, pág. 2.

2º. Ausencia de fase declarativa. El monitorio es un proceso totalmente expeditivo, es decir, a grandes rasgos, cualquier acreedor puede solicitar de un órgano judicial que, requiera a un deudor del pago de una supuesta deuda, bajo apercibimiento de ejecución, y esto únicamente aportando alguno de los documentos de crédito que la Ley recoge con extrema amplitud, y que además, no tienen por qué constituir una garantía de fiabilidad, solo es necesario que tales documentos constituyan un “principio de prueba de la relación laboral y de la cuantía de la deuda”. Este documento ha de ir acompañado eso sí, de la presentación de un formulario debidamente cumplimentado donde únicamente es necesario aportar los datos personales tanto del acreedor como del deudor.

Si estas dos premisas cumplen los requisitos establecidos, el Letrado de la Administración de Justicia aceptará la petición del acreedor sin más trámite, es decir, sin haber dado previa audiencia a la persona deudora, y sin haber realizado la más mínima actividad probatoria que acredite la existencia o realidad del crédito invocado, antes de llevarse a cabo tal requerimiento de pago.

Si el deudor no paga, o no se opone en forma al requerimiento de pago realizado por el Secretario Judicial, este requerimiento pasa a convertirse en un auténtico título de ejecución, y como tal, será susceptible de ser llevado a efecto por los coactivos trámites del proceso de ejecución forzosa.

Por el contrario, si el deudor se opone en forma y tiempo al pago del crédito requerido, el proceso monitorio finaliza igualmente, pero dando traspaso a la apertura de un proceso laboral ordinario, donde recaerá la resolución pertinente, como si dicho proceso no hubiese tenido la previa tramitación de un proceso monitorio.

3º. Limitación cualitativa y cuantitativa de los créditos reclamados a través del proceso monitorio. Hay que tener en cuenta que al proceso monitorio no pueden acceder cualesquiera clases de reclamaciones de índole económica, por lo que, la aceptación de las mismas se subordina a exigencias cualitativas, cuantitativas y formales.

- En primer lugar, hay que tener en cuenta que por medio del proceso monitorio únicamente se podrán reclamar los créditos que representen deudas dinerarias vencidas, exigibles y de cuantía determinada. Estas deudas han de ser derivadas de la relación laboral, excluyéndose las reclamaciones de carácter colectivo, y aquellas que se dirijan a empresarios que se encuentren en situación de concurso.

- Como decíamos en el párrafo anterior, los créditos susceptibles de reclamarse a través de este proceso tienen también un límite cuantitativo, en concreto, no podrán los mismos exceder de seis mil euros (art. 101 LRJS).

- Por último, como hemos comentado anteriormente, al proceso monitorio únicamente podrán acceder créditos que se hallen formalmente documentados en alguno de los soportes a que se refiere el art. 101 a) LRJS⁵.

⁵ GARBERÍ LLOBREGAT, J, *El nuevo proceso laboral: comentarios a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social*, Cizur Menor: Civitas, 2011, págs. 301-303.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. DERECHOS DE CRÉDITO RECLAMABLES A TRAVÉS DEL PROCESO MONITORIO:

Si hay una característica que es destacable en este proceso, es sin duda la celeridad con la que se lleva a trámite; esto ha provocado que necesariamente se instauren unas limitaciones que impidan reclamar cualquier tipo de derecho de crédito, puesto que, teniendo en cuenta que el proceso monitorio sirve para emitir un requerimiento de pago que acarrea una ejecución forzosa del crédito reclamado, se entiende claramente la necesidad de acotar el tipo de reclamaciones que se pueden presentar por medio de esta vía.

“El legislador ha limitado el ámbito de aplicación del proceso monitorio únicamente a los derechos de crédito que representen una deuda dineraria de importe limitado, que sea líquida o determinada, vencida y exigible, y que, además, se acredite mediante alguno de los documentos que se mencionan a lo largo del art. 101. a) LRJS.⁶”

Aún con estas limitaciones, en la práctica, los documentos fijados por parte del legislador para realizar la solicitud monitoria no requieren formalidad ni certificado de autenticidad ninguno, es más, el legislador no va a comprobar la veracidad de los mismos, ni si cumplen con lo legalmente establecido, con presentarlos tal y como viene recogido será suficiente para que la petición por parte del acreedor sea aceptada a trámite.

Dicho esto, si desglosamos las características recogidas en el art. 101 a) LRJS, podemos distinguir entre:

- Exigencias cualitativas.
- Exigencias cuantitativas
- Exigencias formales.

⁶ GARBERÍ LLOBREGAT, J, *El nuevo proceso laboral: comentarios a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social*, Cizur Menor: Civitas, 2011, pág. 304.

3.1. EXIGENCIAS CUALITATIVAS:

Antes de entrar en detalle, debemos tener en cuenta que estas tienen que derivarse siempre de una relación laboral, y con los siguientes matices: solo podrán reclamarse ante empresarios que no se encuentren en situación de concurso, no podrán hacerse reclamaciones de carácter colectivo que se pudieran formular mediante la representación de trabajadores, y en ningún caso se admitirán tampoco las reclamaciones ante entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social, así lo dispone la LC⁷.

Dicho esto, tal y como transcribíamos anteriormente, el art 101 recoge que las deudas cuya reclamación pueda ser tramitada por el cauce del proceso monitorio precisan ser dinerarias, de cuantía determinada, estar vencidas y ser exigibles.

3.1.1. Deudas dinerarias:

La primera de las limitaciones impuestas por el legislador es la exigencia de que los derechos de crédito que se pretendan reclamar por medio del proceso monitorio deben estar fundamentadas en deudas dinerarias y que se encuentren determinadas, es decir, de esta forma, quedan fuera de poderse reclamar por medio de este proceso cualesquiera derechos subjetivos patrimoniales que no reclamen un importe determinado, es decir, que reclamen un hacer o no hacer algo, o aquellas que busquen la entrega de un bien de cualquier naturaleza que no sea la estrictamente dineraria.

Respecto a este apartado, es importante aclarar que no existe limitación alguna respecto a la moneda en la que se reclame el derecho de crédito, esto lo encontramos en el art. 577.1 de la supletoria LEC, donde se recoge que el hecho de que el título objeto de ejecución forzosa exprese una cantidad de dinero en moneda extranjera no impedirá que se despache la ejecución para

⁷ CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., "El proceso monitorio laboral", *Relaciones laborales*, núm. 1, tomo 1, 2013, págs 2-3.

obtenerla y entregarla⁸.

3.1.2. Deudas dinerarias de cuantía determinada:

Que la cuantía que se reclame por medio del proceso monitorio tenga que ser “determinada” significa que ha de ser líquida, o como recoge el art. 101 LRJS: *“exactamente determinadas en su cuantía”*, es decir, que este concretada en una suma de dinero o que su determinación dependa de una simple operación aritmética, y *“que se exprese en el título con letras, cifras o guarismos comprensibles”* (art. 572.1 LEC), esto tiene su lógica, ya que, solo de este modo, puede ser admitida a trámite la solicitud monitoria, creándose de forma instantánea el requerimiento de pago al deudor bajo apercibimiento de ejecución. Lógicamente, se entiende que dicho requerimiento de pago perdería todo su sentido si en el mismo no se pudiera concretar con total exactitud cuál es el importe total de la deuda cuyo pago se reclama al deudor, por ello esto es exigido implícitamente en la propia LRJS, donde se requiere al acreedor que en la solicitud monitoria haga constar expresamente *“el detalle y desglose de los concretos conceptos, cuantías y periodos reclamados”* (art.101.a).

Volviendo a lo recogido en el art 572 de la LEC, si hay que aclarar que aunque se exige que la deuda reclamada este correctamente determinada, también la ley apunta que *“no será preciso, sin embargo, al efecto de despachar ejecución, que sea líquida la cantidad que el ejecutante solicite por los intereses que se pudieran devengar durante la ejecución y por las cosas que éste origine”*.

3.1.3. Deudas dinerarias vencidas:

Además de tener que ser liquidas y determinadas, el legislador exige que las deudas susceptibles de ser reclamadas estén ya vencidas en el tiempo, con este requisito aclaramos que la reclamación de las mismas no puede venir

⁸ PRECIADO DOMÉNECH, C.H., “El nuevo procedimiento monitorio laboral”, *Revista Doctrinal Aranzadi Social*, núm. 11, 2012, pág. 14.

referida a una obligación en el que no se halla dispuesto un plazo de entrega concreto, y este se encuentre vencido, como requiere el primer párrafo del art. 101 LRJS, es decir, la efectividad del crédito dependerá del transcurso de un determinado periodo de tiempo ya fijado con anterioridad y que se encuentra finalizado. Encontramos también el apunte en el art. 1125 CC que dispone lo siguiente: *“Las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto, sólo serán exigibles cuando el día llegue”*.

Hay que aclarar que por día cierto se entiende aquel que necesariamente ha de venir, aunque se ignore cuándo.

Podemos observar que tanto este requisito de vencimiento, como el carácter dinerario de la deuda, son parámetros que la autoridad judicial competente puede controlar de inmediato a la hora de estudiar la admisión de la inicial petición monitoria.

3.1.4. Deudas dinerarias exigibles:

Si en el párrafo anterior, mencionábamos la sencillez con la que el secretario Judicial podía cerciorarse de que se cumpliesen los requisitos expuestos hasta el momento, es decir, que la deuda reclamada ha de ser dineraria, de cuantía determinada y estar vencida en tiempo, es posible que esta última exigencia cualitativa sea la más compleja de determinar, ya que, que la misma sea “exigible” solo puede hacer referencia a que la obligación haya surgido de la relación laboral entre empresario y trabajador, y este último demuestre que ha cumplido con sus obligaciones laborales para con el empresario deudor, teniendo por su parte, cumplidas las condiciones precisas para que su derecho de crédito dinerario puede ser reconocido como un crédito exigible.

Este cumplimiento por parte del trabajador, insistimos en que sería la interpretación más lógica si queremos diferenciarla por ejemplo, del hecho de que la deuda sea exigible porque el plazo en el que tendría que haberse saldado ya ha vencido en el tiempo, pero si que es verdad, que para poder

comprobar que el acreedor ha cumplido con las obligaciones que determinan el nacimiento de su crédito, sería necesario que el tribunal realizase una investigación al respecto que pruebe la veracidad del cumplimiento obligacional, lo que afectaría por un lado, a que en algunos casos ya no bastaría con presentar los documentos reflejados en el art 101 a) LRJS, que actualmente no requieren de prueba de veracidad alguna, y además frustraría la agilidad y rapidez que destaca en concreto a este proceso sobre otros a la hora de efectuar un requerimiento de pago, porque la investigación respecto a si está o no cumplida la parte del acreedor llevaría más tiempo a la autoridad judicial.

Dicho esto, el término exigible, debemos interpretarlo como una reiteración del vencimiento de la deuda, condición que obviamente puede ser examinada por la autoridad judicial de manera instantánea y no necesita prueba al respecto, solo controlar el tiempo a cuyo transcurso se subordinó la efectividad del crédito, siendo este un presupuesto de admisibilidad de la petición monitorio.

3.2 EXIGENCIAS CUANTITATIVAS:

Es posible que esta sea una de las diferencias más significativas que encontramos entre el monitorio laboral y el monitorio civil. Actualmente el legislador social tiene fijado un límite cuantitativo que acota los créditos que pueden ser reclamados por medio de este proceso, en concreto, no podrán los mismos exceder de seis mil euros (art. 101 LRJS).

Este límite resultará curioso si bien lo comparamos con lo establecido en la LEC, donde, tras la entrada en vigor de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de agilización Procesal, el límite cuantitativo quedó suprimido, por lo que en el proceso monitorio civil pueden ser reclamadas deudas dinerarias de cualquier cuantía, equiparándose así, al proceso monitorio europeo, con el fin de evitar limitaciones de acceso a este procedimiento. Sin embargo, el límite de seis mil euros puede considerarse elevado si lo comparamos con la cifra estipulada para el acceso al recurso de suplicación, que no puede exceder de

los tres mil euros (art. 191 LRJS), *“dado que una cuantía que no accede al recurso es más adecuada para ser objeto de reclamación monitoria”*⁹.

El siguiente punto a tratar dentro de esta limitación, es si, a la hora de presentar la solicitud monitoria, la cantidad reclamada ha de proceder de una única deuda, o si se pueden acumular varias, claro que, siempre que no superen el límite legal máximo de seis mil euros.

La acumulación objetiva de pretensiones está recogida en el art 25.1 de la LRJS donde se permite al actor *“acumular en su demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque procedan de diferentes títulos, siempre que todas ellas puedan tramitarse ante el mismo Juzgado o Tribunal”*, por lo que se entiende que no existe impedimento legal para aceptar la acumulación de acciones en el proceso monitorio, siempre y cuando se trate de deudas que reúnan los requisitos del artículo 101 y no superen el límite cuantitativo establecido. Se trata de aprovechar un mismo proceso para resolver más de una pretensión, abogando a la característica de sencillez que define al monitorio laboral.

Desde luego, lo expuesto en el párrafo anterior, se refiere siempre a que estas pretensiones vengan de un mismo acreedor y se reclamen a un único deudor, así lo recalca la literalidad del art. 101 que se refiere siempre al “empresario deudor”, quedando descartada la posible acumulación por parte de varios acreedores frente a uno o varios deudores, o un solo acreedor frente a varios deudores, ya que no se entiende en un procedimiento sencillo y rápido como el monitorio laboral.

3.3 EXIGENCIAS FORMALES:

Los derecho de crédito que se reclamen por medio del proceso monitorio, tienen que ir acompañados de documentos que los justifiquen, digamos que se exigen que sean “créditos documentados” para impedir que se

⁹ FOLGUERA CRESPO, *Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LEY 19110/2011)*, Lex Nova, Valladolid, 2011, pág. 432.

tomen como fundamento acreditativo las simples manifestaciones orales acerca de la realidad o existencia de la deuda en cuestión.

Los documentos que pueden acreditar la deuda reclamada los encontramos recogidos en la letra a) del art. 101 LRJS, y son: “*copia del contrato, recibos de salarios, comunicación empresarial o reconocimiento de deuda, certificado o documento de cotización o informe de vida laboral, u otros documentos análogos de los que resulte un principio de prueba de la relación laboral y de la cuantía de la deuda*”, además de estos, deberá presentarse la documentación justificativa de haber intentado la previa conciliación o mediación cuando éstas sean exigibles según los arts. 63 y 64 LRJS¹⁰.

Por último, hay que tener en cuenta que además de cumplir con los requisitos anteriormente comentados, es necesario que la solicitud monitoria pueda ser notificada por los medios previsto en los artículos 56 (correo certificado, telégrafo, fax, correo electrónico u otros sistemas de comunicación semejantes) y 57 (cédula) de la LRJS, quedando explícitamente excluida por el artículo 59, la comunicación edictal. El monitorio tendrá que transformarse en declarativo ordinario o sobreseerse si fracasan las notificaciones por los sistemas legalmente previstos¹¹.

¹⁰ GARBÉRÍ LLOBREGAT, J, *El nuevo proceso laboral: comentarios a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social*, Cizur Menor: Civitas, 2011, págs. 307-308.

¹¹ CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., “El proceso monitorio laboral”, *Relaciones laborales*, núm. 1, tomo 1, 2013, pág. 4.

4. ÓRGANO JUDICIAL COMPETENTE.

4.1. COMPETENCIA OBJETIVA:

Si acudimos directamente al art. 101 de la LRJS, es cierto que nada se dice sobre la competencia objetiva, por lo que tenemos que acudir al art. 93 de la Ley Orgánica del poder Judicial (en adelante LOPJ) y al art. 6 de la LRJS donde se señala que *“Los juzgados de lo social conocerán en única instancia de todos los procesos atribuidos al orden jurisdiccional social, con excepción de los asignados expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional en los artículos 7, 8 y 9 de esta Ley y en la Ley Concursal”*.

Las materias que se atribuyen a los órganos jurisdiccionales del orden social las encontramos en el art. 2 a) de la LRJS, que dice que conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan *“Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo.”* Por lo que el conocimiento de las pretensiones monitorias laborales es atribuido en exclusiva a los Juzgados de lo Social¹².

4.2. COMPETENCIA FUNCIONAL:

Como ya hemos dicho en el apartado anterior, toda la tramitación del proceso monitorio corresponde al Juzgado de lo Social. Aunque las funciones del Letrado de la administración de justicia no pueden conceptuarse como competencia funcional, si podemos distinguir dentro de esta competencia en el reparto de funciones que se dio dentro del seno del órgano judicial tras la Ley 13/09, de tal manera que, dentro del monitorio laboral distinguimos entre:

Funciones que corresponden al Letrado de la Administración de Justicia: La admisión a trámite, el requerimiento de subsanación de requisitos subsanables, el requerimiento de pago al

¹² LIEBANA ORTIZ, J.R., *“El nuevo proceso monitorio laboral: una visión de conjunto”* Revista española de Derecho del Trabajo, núm. 156, 2012, pág. 15.

empresario, su traslado al FOGASA, el decreto de archivo por pago, el decreto de archivo y traslado al demandante para que inste la ejecución.

- Funciones que corresponden al Juez: la inadmisión de la petición inicial, el auto de despacho de la ejecución, el auto resolutorio de la oposición a la ejecución y el auto acogiendo la reclamación en cuanto a las cantidades reconocidas y no impugnadas.

- El despacho de la ejecución y su tramitación: corresponderá al mismo Juzgado ante el que se haya constituido el título ejecutivo, que es el decreto dando por terminado el monitorio y dando traslado al demandante para que solicite ejecución (art. 101c) y art.237 LJS), conforme a las normas del Libro IV¹³.

4.3. COMPETENCIA TERRITORIAL:

El artículo 101 de la LRJS no señala un fuero específico en el que presentar la solicitud o petición monitoria, a diferencia del modelo civil en el que la competencia territorial se determina legalmente con carácter exclusivo y excluyente, lo que impide que sean de aplicación las normas sobre sumisión expresa o tácita (art. 813 LEC)¹⁴.

Debido a esta falta de determinación, dentro del artículo 101, es necesario acudir a las normas genéricas, así, el artículo 10.1 de la LRJS determina como competente al juzgado del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandado; dicho esto, se trata de dos fueros concurrentes y optativos, el actor puede elegir indistintamente entre uno u otro.

Si los servicios se prestan en lugares de distintas circunscripciones territoriales, el trabajador podrá elegir entre aquél de ellos en que tenga su domicilio, el del contrato, si hallándose en él el demandado pudiera ser

¹³ PRECIADO DOMÉNECH, C.H., "El nuevo procedimiento monitorio laboral", *Revista Doctrinal Aranzadi Social*, núm. 11, 2012, pág. 7.

¹⁴ CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., "El proceso monitorio laboral", *Relaciones laborales*, núm. 1, tomo 1, 2013, págs. 4.

requerido, o el del domicilio del empresario.

En el caso de que el empresario sea una Administración pública será juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandante a elección de este, salvo para los trabajadores que presten servicios en el extranjero, en que el juzgado competente será el del domicilio de la Administración pública demandada (art. 10.1 LRJS).

Si se plantea que el deudor sea una persona jurídica, el art. 41 CC indica que su domicilio se encontrará *“en el lugar de su representación legal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto”*, atendiendo a esto, aunque la persona jurídica ante la que se presente el requerimiento de pago tenga diferentes establecimientos abiertos al público, la petición siempre se deberá presentar en el lugar donde tenga su representación legal o donde se encuentre su principal establecimiento, si este fuese conocido¹⁵.

Teniendo en cuenta lo expuesto, hay que aclarar los siguientes supuestos especiales:

- Cuando el Juzgado competente no sea el del domicilio del empresario, la tramitación del proceso monitorio deberá hacerse por exhorto, con la consiguiente dilación en la tramitación (contemplado en el art. 813 LEC).

- En el caso de que concurra una acumulación subjetiva de monitorios, la regla competencial que rige es la que se recoge en el art. 10.1 LRJS, esta dispone que, en el caso de que sean varios los demandados y se optase por el fuero del domicilio, el actor podrá elegir el de cualquiera de los demandados.

- Por último, hay que abordar el tema sobre qué ocurre cuando, una vez iniciado ya el proceso monitorio, se descubre que el domicilio del empresario deudor, no está en la circunscripción territorial del Juzgado al momento de presentar la petición. Esta cuestión también se ha planteado en el monitorio civil, donde el fuero del domicilio del demandado es imperativo y exclusivo (art. 813 LEC), pero, a diferencia de este, en el monitorio laboral una

¹⁵ LIEBANA ORTIZ, J.R., *“El nuevo proceso monitorio laboral: una visión de conjunto”* Revista española de Derecho del Trabajo, núm. 156, 2012, pág. 16.

vez interpuesta la petición monitoria habrá que mantener el fuero por el que optó el actor, y siendo así podemos distinguir:

✓ Fuero de la prestación de los servicios: es indiferente que el domicilio del demandado resulte estar en un partido distinto al que se consignó en la petición.

✓ Fuero del domicilio del demandado: en este caso si resulta del intento de requerimiento que el domicilio del demandado está en otro partido judicial y no puede mantenerse la competencia por no haberse prestado los servicios en el partido judicial donde se realiza la petición monitoria, procederá dictar auto declarando la falta de competencia territorial y previniendo al demandante ante quién y cómo puede hacer uso de su derecho, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en plazo común de 3 días, (art.5 LJS).

✓ Cambios de domicilio posteriores a la interposición de la petición monitoria: los mismos no deberían alterar la competencia territorial, en virtud de la perpetuación de la jurisdicción que tiene por efecto la litispendencia, según se prevé en el art.411 LEC¹⁶.

La falta de competencia territorial únicamente se apreciara cuando el demandado o quien sea parte legítima en el juicio, proponga en tiempo y forma la declinatoria (art. 63,1 LEC).

“No cabe desconocer tampoco que el legislador social es consciente de que buena parte del éxito del monitorio radica en que el deudor sea localizado, por lo que a estos efectos, será el hecho de la localización, más que las normas de competencia, lo que determine la viabilidad del posterior requerimiento de pago”¹⁷.

¹⁶ PRECIADO DOMÉNECH, C.H., “El nuevo procedimiento monitorio laboral”, *Revista Doctrinal Aranzadi Social*, núm. 11, 2012, págs. 8-9.

¹⁷ CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., “El proceso monitorio laboral”, *Relaciones laborales*, núm. 1, tomo 1, 2013, pág. 5.

5. REPRESENTACIÓN Y DEFENSA.

Una de las ventajas que tiene este proceso, es el hecho de que las partes puedan comparecer por sí mismas, esto hace que sea una vía muy demanda ya que, además de ser rápida, hacer la reclamación del derecho de crédito no le supone ningún gasto al acreedor.

El artículo 101 de la LRJS no dice nada en referencia a la representación y defensa dentro del proceso monitorio, por lo que esta deberá ajustarse a los principios generales establecidos en el Capítulo II del Título II, del Libro Primero de la LRJS.

Dicho esto, observamos que la representación en el monitorio laboral se rige de igual forma que en el monitorio civil, en el que: *“para la presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio no será preciso valerse de procurador o abogado”* (arts. 814.2, 23.2.1º y 31.2.1º LEC)¹⁸.

En el orden jurisdiccional social, este derecho viene recogido en el art. 18.1 de la LRJS, sobre “intervención en el juicio”, en el que se establece que: *“Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. La representación podrá conferirse mediante poder otorgado por comparecencia ante el secretario judicial o por escritura pública”*. Además añade el art. 18.2 que *“en caso de otorgarse la representación a abogado, deberán seguirse los trámites previstos en el apartado 2 del artículo 21LRJS”*.

En cualquier caso, para que se garantice el principio de igualdad entre las partes, en el art. 21 LRJS encontramos la obligación de que, si una de las partes va a comparecer defendida o representada por abogado, procurador o graduado social colegiado, debe hacerlo constar, bien en la petición inicial si es el demandante, o bien en el escrito de oposición, si es el demandado, con la finalidad de que se de traslado de esto al actor para que el pueda también

¹⁸ LIEBANA ORTIZ, J.R., “El nuevo proceso monitorio laboral: una visión de conjunto” Revista española de Derecho del Trabajo, núm. 156, 2012, pág. 14.

conferir su representación a procurador, graduado social o abogado; el Letrado de la administración de Justicia es la figura a quien se encomienda garantizar esta igualdad entre las partes en todo momento¹⁹.

En el caso de que el demandado pretenda comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por un graduado social colegiado o un procurador, deberá notificarlo por escrito ante el Juzgado o Tribunal, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio; La falta de cumplimiento de este requisito supone la renuncia al derecho de valerse en el acto del juicio de representación por ninguna de las figuras que ya hemos nombrado anteriormente.

Además de estos, el trabajador podrá otorgar su apoderamiento procesal al sindicato en que esté afiliado, para que este intervenga en su nombre, recayendo sobre el trabajador los efectos de la actuación del sindicato. Hay que añadir también, que se prevé la posibilidad de que los sindicatos puedan actuar motu proprio en el proceso monitorio laboral, “sin necesidad de apoderamiento expreso”, en nombre y representación procesal de los trabajadores que estén afiliados a ellos, ya que, según el art. 20.2 LRJS: *“acreditada por el sindicato la condición de afiliado y la existencia de comunicación al afiliado de su voluntad de iniciar el proceso, la autorización se presumirá concedida salvo declaración en contrario del trabajador afiliado”*²⁰.

Aunque al principio de este apartado hemos señalado como una ventaja que las partes no necesiten de forma obligatoria ser representadas por una figura determinada, si es verdad que la facultad de comparecer por sí mismas es la que menos se utiliza, ya que en general los trabajadores necesitan un representante que disponga de los conocimientos de derecho que le aseguren un buen asesoramiento y una buena defensa.

En este punto, debemos destacar el papel que tiene aquí el graduado

¹⁹ LIEBANA ORTIZ, J.R., “El nuevo proceso monitorio laboral: una visión de conjunto” Revista española de Derecho del Trabajo, núm. 156, 2012, pág. 14.

²⁰ PRECIADO DOMÉNECH, C.H., “El nuevo procedimiento monitorio laboral”, *Revista Doctrinal Aranzadi Social*, núm. 11, 2012, pág. 7.

social, ya que, aunque su función está más limitada que la del procurador o la del abogado, como ya hemos comentado anteriormente este puede ejercer la representación en el proceso monitorio, teniendo la posibilidad hasta de interponer recurso de suplicación. En el caso de tener necesidad de interponer un recurso de casación u otros ante el Tribunal Supremo, solamente tendrá competencia un abogado.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL MONITORIO:

6.1 INICIO DEL PROCESO:

Tal y como aparece indicado en el art. 101 a) de la LRJS, “el proceso monitorio comenzará por petición inicial”, y en la forma en la que el legislador se expresa respecto a esta petición se deduce que este ha querido diferenciarla de una demanda como tal, no solo por la ausencia de contradicción y por la rapidez procedimental, sino básicamente porque se trata de un escrito muy sencillo y escueto. Esta manera de obviar en lo posible su identificación con un escrito de demanda puede ser criticado desde el punto de vista de técnica legislativa, ya que rompe con la sistemática existente en el resto de la Ley: se puede decir que el proceso monitorio laboral también comienza con una demanda, porque ese es el nombre que recibe el escrito inicial de todo proceso declarativo, ya sea laboral, ordinario o especial (arts. 80 y 102.2 LRJS)²¹.

6.1.1. Petición inicial: escrito de petición monitoria.

En el art. 101 LRJS no se determina que la forma en la que haya que presentar esta petición sea estrictamente por escrito, de hecho, la ley dice que “la solicitud se presentará, preferentemente, por medios informáticos, de disponerse de ellos, pudiendo extenderse en el modelo o formulario que se facilite al efecto.

Igualmente, tampoco se establecen requisitos formales en cuanto a la misma, simplemente que contenga la información especificada en el mismo artículo, donde se exige que se incluyan los siguientes datos:

- 1) Identidad completa y precisa del empresario deudor, datos de identificación fiscal, domicilio completo y demás datos de localización,

²¹ LIEBANA ORTIZ, J.R., “El nuevo proceso monitorio laboral: una visión de conjunto” *Revista española de Derecho del Trabajo*, núm. 156, 2012, págs. 24-25.

y en su caso de comunicación, por medios informáticos y telefónicos, tanto del demandante como del demandado.

El hecho de que se incluyan estos datos, atendiendo a lo dispuesto en el párrafo primero del art. 101 LRJS, y en el segundo párrafo de su letra b), donde se establece que la única modalidad de notificación del requerimiento de pago al deudor será personal, mediante entrega al mismo, o a una persona interpuesta, en el domicilio o residencia del deudor (o en el lugar en el que se le localice), excluyéndose en cualquier caso la comunicación edictal de dicho requerimiento. Esta información se revela como un requisito indispensable y determinante de la admisibilidad de la inicial petición monitoria.

De no incorporarse debidamente esta información, en el caso de que el acreedor alegue desconocerlo con exactitud, la petición monitoria será rechazada, por lo que el acreedor, de no poder subsanar esta carencia, deberá acudir al proceso laboral declarativo que corresponda.

2) Detalle y desglose de los concretos conceptos, cuantías y períodos reclamados. Términos de los que no se exige una fundamentación detallada de la pretensión de condena pecuniaria deducida por el acto monitorio (como cuando se formaliza una demanda de proceso ordinario), pero si se le reclama al trabajador que indique el origen de la deuda, aunque no se encuentre expresamente recogido en la norma, es decir, el trabajador debe exponer la relación jurídico-laboral existente que será el objeto del proceso²².

6.1.2. Documentos que han de acompañarse a la petición monitoria.

Nuestro sistema procesal, ha optado por un monitorio de base documental por lo que, a esta petición inicial de la que hemos hablado en el

²² GARBERÍ LLOBREGAT, J, *El nuevo proceso laboral: comentarios a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social*, Cizur Menor: Civitas, 2011, págs. 308-310.

apartado anterior, y respecto a lo indicado en el art. 101 a) “Deberá acompañarse copia del contrato, recibos de salarios, comunicación empresarial o reconocimiento de deuda, certificado o documento de cotización o informe de vida laboral, u otros documentos análogos de los que resulte un principio de prueba de la relación laboral y de la cuantía de la deuda, así como documentación justificativa de haber intentado la previa conciliación o mediación cuando éstas sean exigibles. La solicitud se presentará, preferentemente, por medios informáticos, de disponerse de ellos, pudiendo extenderse en el modelo o formulario que se facilite al efecto.”

Concretamente, lo que la Ley requiere es tanto un principio de prueba de la relación laboral, como de la cuantía de la deuda, aunque si hay que indicar que no es necesario que sean pruebas plenas, basta con que sean indicios racionales que permitan al Letrado de la Administración de Justicia considerar la reclamación del peticionario cara a la posterior admisión de su petición. “En ese sentido, la doctrina judicial elaborada con ocasión del monitorio civil señala que “la labor del Tribunal en este punto es similar al de la apreciación del *fumus boni iuris* en materia de medidas cautelares” (AAP de Alicante de 26 de enero de 2005, nº rec. 689/2004 y SAP de Toledo de 10 de marzo de 2010, nº rec. 150/2009)²³.

Además, la LRJS acoge el criterio de números apertus en relación a los documentos aceptados para valorar el origen y la cantidad de la deuda, el mismo que sigue la LEC, y por ello, no serán admitidos los “documentos creados unilateralmente por el acreedor”, algo que si permite el art. 812 de la LEC. Por ello, para ser valorados, estos documentos deben proceder de la relación jurídico material existente entre trabajador y empleador. Pero, aunque se derive de esta, es obvio que en algunos casos nos encontraremos ante documentos bilaterales, como es el contrato de trabajo; también encontraremos documentos que se generan de forma unilateral, como es el reconocimiento de deuda por parte del empresario; y por supuesto, documentos ajenos a ambas partes de la relación laboral, como es el informe de vida laboral, que se haya

²³ CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., “El proceso monitorio laboral”, *Relaciones laborales*, núm. 1, tomo 1, 2013, págs 7.

expedido por la TGSS y deja constancia de los periodos cotizados por el trabajador.

Dicho esto, hay que señalar que la falta absoluta de documentos acreditativos impedirá la admisión a trámite de la petición monitoria, siendo un requisito subsanable por el cauce del art 101 b) LRJS.

Por último, tal y como dispone el artículo 63 de la LRJS “ Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente”, debe aportarse junto a la petición la documentación justificativa de haber intentado una conciliación o mediación previa, siempre que estas sean exigibles²⁴.

6.2. ÓRGANO ANTE EL QUE SE PRESENTA:

Si nos centramos en el art. 101 de la LRJS, podemos ver que no se aprecia información respecto a ante que órgano es al que se presenta la solicitud de iniciación del proceso monitorio, sin embargo si que se señala que quienes tienen competencia objetiva para conocer de lo relativo a el proceso monitorio serán los juzgados de lo Social.

Igualmente, en este apartado podemos acudir al art 44 de la LRJS, que se refiere al lugar de presentación de escritos y documentos, donde, en su primer punto recoge que “ *Las partes habrán de presentar todos los escritos y documentos en los Registros de la oficina judicial adscrita a los Juzgados y Salas de lo Social.*”

En el segundo punto del artículo 44 LRJS se establece que: “*cuando las oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios técnicos que permitan el envío y la normal recepción de escritos indicadores y demás escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la*

²⁴ CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., “El proceso monitorio laboral”, *Relaciones laborales*, núm. 1, tomo 1, 2013, págs. 7-8.

remisión y recepción íntegras y de su fecha, los escritos y documentos podrán enviarse y recibirse por aquellos medios, con plenos efectos procesales, con el resguardo acreditativo que proceda de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 1354 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”

Lo que si hay que tener en cuenta en cuanto a la presentación de escritos, es que según el art. 45.2 de la LRJS “ en ningún caso se admitirá la presentación de escritos dirigidos al orden social en el juzgado que preste el servicio de guardia.”

6.3 ADMISIÓN E IN ADMISIÓN DEL ESCRITO DE PETICIÓN MONITORIA.

Tal y como se reconoce en el art. 101 b) LRJS *“La admisión del escrito de iniciación del proceso monitorio corresponde, con carácter general, a el letrado de la administración de Justicia” (también puede admitirla el juez o tribunal, cuando, pese a la opinión contraria del secretario, considere que en ella concurren todas las exigencias legales)*²⁵.

En cualquier caso, antes de valorar la admisión a trámite de la solicitud monitoria, lo primero que debe hacer el letrado de la administración de Justicia es comprobar de oficio que se cumplan los requisitos y los presupuestos de admisibilidad, tanto objetivos como subjetivos, previstos en el primer párrafo del art. 101 de la LRJS, que se pueden resumir en:

- A) Que la deuda reclamada sea efectivamente una deuda vencida, exigible y de cuantía determinada.
- B) Que la cuantía de la misma no supere el límite legal de los seis mil euros.
- C) Que los documentos aportados constituyan un principio de prueba de la existencia de la deuda, de la cuantía de la misma y de la relación laboral existente entre empresario y trabajador.

²⁵ GARBERÍ LLOBREGAT, J, *El nuevo proceso laboral: comentarios a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social*, Cizur Menor: Civitas, 2011, págs. 311-312.

D) Que el escrito de petición redactado por el trabajador contenga todos los datos que se requieren legalmente a efectos de ser notificados tanto el demandante como el demandado.

Respecto a este último apunte, hay que indicar que, de no conocer el trabajador la información respecto al domicilio del deudor, se prevé la intervención de el Letrado de la Administración de Justicia, ya que la Ley le faculta para completar esa información con “*otros domicilios o datos de identificación*”, entendiéndose como una de las averiguaciones que se realizan con el fin de comprobar que la empresa no se encuentre en situación de concurso, esto lo hará “*utilizando los medios de que disponga el juzgado*” (art. 101b)²⁶.

En el caso de que el letrado de la administración de justicia observe que se incumple alguno de los requisitos establecidos legalmente, concederá al demandante un plazo de cuatro días para que subsane el defecto apreciado, siempre que este sea subsanable.

Este planteamiento respecto a la admisión y a la subsanación de incumplimiento de requisitos que se establecen en el art. 8.1 y 2 de la LRJS, podemos decir que es reitera lo ya previsto para la admisión de una demanda ordinaria, siendo incluso el plazo de subsanación igual en ambos casos (4 días).

Dicho esto, si transcurrido el plazo de cuatro días, el demandante no ha subsanado los defectos, o estos fuesen insubsanables, el Letrado de la Administración de justicia procederá a dar cuenta al Juez para que sea este quien disponga la inadmisión²⁷.

Hay que decir, que “*la subsanación a de estar referida exclusivamente a los contenidos estrictos que para la petición inicial se exigen en el primer*

²⁶ CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., “El proceso monitorio laboral”, *Relaciones laborales*, núm. 1, tomo 1, 2013, págs. 9-10.

²⁷ LIEBANA ORTIZ, J.R., “El nuevo proceso monitorio laboral: una visión de conjunto” *Revista española de Derecho del Trabajo*, núm. 156, 2012, pág. 16.

apartado del art. 101, y que la finalidad y el fundamento de este trámite han de hallarse en el principio pro actione, de suerte que es una exigencia constitucional que se favorezca la corrección de los defectos que puedan ser reparados (STC 52/2009, de 23 de febrero (LEY 5331/2009)). Pero aún así, una cosa es corregir defectos subsanables en los documentos presentados, o en la redacción de la petición o en el contenido del formulario, y otra una omisión de los requisitos que impidan un examen formal de la petición de cara a su posterior admisión.²⁸”

Podemos entonces decir que, estos mismos pasos son los que permite el proceso monitorio europeo que establece que *“cuando en el formulario de la petición no consten todos los elementos necesarios, el órgano jurisdiccional permitirá al demandante completar o rectificar la petición, salvo cuando ésta sea manifiestamente infundada o inadmisibles”* (art. 9 Reglamento núm. 1896/2006).

Además de que los defectos detectados en la petición monitoria no sean subsanados en plazo, la inadmisión a trámite de esta puede obedecer a varias causas, como pueden ser:

- La falta de personalidad o capacidad procesal de quien presente la petición.
- Que se incumpla alguno de los requisitos o límites que determinan este proceso en relación a la deuda reclamada, como puede ser que esta sea de cuantía superior a los seis mil euros o que se entienda que la deuda aún no ha vencido, igualmente no procederá si la obligación no tiene una naturaleza dineraria.
- Puede ocurrir que la documentación presentada no constituya un principio de prueba suficiente del derecho del autor, es decir, de la existencia tanto de la relación laboral como de la cuantía deuda.

²⁸ CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., “El proceso monitorio laboral”, *Relaciones laborales*, núm. 1, tomo 1, 2013, pág 11.

- Se contempla de igual modo, la inadmisión de la petición cuando no es posible localizar al deudor para requerirle el pago, ya que, como hemos dicho anteriormente, la petición inicial debe incluir obligatoriamente el domicilio y los datos de este para su localización e identificación. A tener en cuenta que si es verdad que, tal y como recoge el art. 101 b) LRJS, el Letrado de la Administración de Justicia puede “complementar” esta información si tras realizar las averiguaciones pertinentes puede designar un domicilio; en el caso de que resulte imposible conocer tales datos, la petición no podrá prosperar.

La resolución de inadmisión de la petición monitoria se reserva únicamente al Juez, quien por medio de auto será quien disponga la inadmisión²⁹, *“tanto cuando los defectos advertidos sean insubsanables, cuanto en el supuesto en que, no siéndolo, no hayan sido subsanados por la parte actora en el trámite conferido al efecto por el Letrado de la Administración de Justicia (art. 101 b) LRJS)”*³⁰.

*“La doctrina civilista se halla dividida entre los que entienden que no cabe recurso frente a la decisión de admisión, por varias razones, como la celeridad del monitorio o la posibilidad de oponerse con toda amplitud, y los que entienden que sí cabe dicho recurso tras la reforma de la Ley 13/09 (RCL 2009, 2090), puesto que el art.206 y el art.451 LEC permiten recurrir los decretos no definitivos del Secretario. En el monitorio laboral entendemos que cabe recurso, conforme al art.186.2 LJS y la interpretación contraria pugnaría con el derecho a la tutela judicial efectiva”*³¹.

En cualquier caso, hay que apuntar que el hecho de que se haya emitido auto que impida la admisión de la petición no impide que el trabajador pueda solicitar un nuevo juicio monitorio una vez subsane el defecto que ha hecho

²⁹ PRECIADO DOMÉNECH, C.H., “El nuevo procedimiento monitorio laboral”, *Revista Doctrinal Aranzadi Social*, núm. 11, 2012, pág. 17.

³⁰ GARBERÍ LLOBREGAT, J, *El nuevo proceso laboral: comentarios a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social*, Cizur Menor: Civitas, 2011, pág. 311-312.

³¹ PRECIADO DOMÉNECH, C.H., “El nuevo procedimiento monitorio laboral”, *Revista Doctrinal Aranzadi Social*, núm. 11, 2012, pág. 18.

que se decline la petición, o bien que haga la pertinente reclamación de cantidad por medio de proceso ordinario.

En el caso de que la petición cumpla con todos los requisitos legalmente establecidos y por ende resulte admisible la petición monitoria, será el Letrado de la Administración de Justicia quien, con carácter general, dictará decreto por el que admitirá a trámite el monitorio (art. 457.4 LOPJ y arts. 206.2 y 208.2 LEC). Secretario previamente había apreciado defectos, ya sean o no subsanables, y una vez dada cuenta al Juez, este ha estimado que los mismos no proceden y por lo tanto si es admisible la petición (art. 101 b) LRJS). En esta misma resolución de admisión, se requerirá de pago al empresario *“para que, en el plazo de diez días, pague al trabajador, acreditándolo ante el juzgado, o comparezca ante esté y alegue sucintamente, en escrito de oposición, las razones por las que a su entender, no debe, en todo o parte, la cantidad reclamada, con apercibimiento de que de no pagar la cantidad reclamada ni comparecer alegando las razones de la negativa al pago, se despachará ejecución contra él. Este requerimiento no podrá practicarse mediante edictos”* (art. 101 b) párrafo 2º LRJS)³².

*“Es en este punto, evidentemente, donde radica la verdadera esencia característica del proceso monitorio, mediante el cual se obtiene una intimación judicial al pago, bajo apercibimiento de ejecución forzosa, de un crédito cuya realidad no ha sido sometida a contradicción con el deudor obligado, ni a ninguna previa actividad probatoria tendente a demostrar la certeza de la deuda reclamada.”*³³

³² CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., “El proceso monitorio laboral”, *Relaciones laborales*, núm. 1, tomo 1, 2013, pág 11.

³³ GARBERÍ LLOBREGAT, J, *El nuevo proceso laboral: comentarios a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social*, Cizur Menor: Civitas, 2011, pág. 312.

6.4 REQUERIMIENTO DE PAGO.

Tal y como explicábamos anteriormente, si la petición monitoria cumple con todos los requisitos legalmente establecidos prácticamente de forma automática es admitida a trámite, y en esta misma resolución que acuerda la admisión, se requerirá de pago al empresario; se trata de un acto de comunicación recogido en el art. 149.4 de la LEC, para ordenar, conforme a la Ley, una conducta o inactividad³⁴, para ello se le concederá un plazo de 10 días en los que el empresario puede pagar al trabajador, advirtiéndolo en cualquier caso que de no hacerlo, o bien en el caso de oponerse a la solicitud, se despachará ejecución contra él.

Aunque si es verdad, que la verdadera esencia del monitorio es satisfacer la deuda para con el acreedor, al mismo tiempo en esta fase del proceso es donde se otorga al deudor la posibilidad de defenderse ante la pretensión generada, y es justo por este motivo, por el que prima la necesidad de que haya una comunicación personal con el empresario deudor, siendo tal la importancia de esto, que el legislador laboral excluye casi prácticamente la comunicación por edictos.

Aún así, si es cierto que la comunicación edictal se contempla en casos excepcionales y como sistema supletorio, regulada en el art. 59 de la LRJS dice que” cuando una vez intentado el acto de comunicación y habiendo utilizado los medios oportunos para la investigación del domicilio, incluida en su caso la averiguación a través de registros, organismos, Colegios Profesionales, entidades y empresas, éstos hayan resultado infructuosos y no conste el domicilio del interesado o se ignore su paradero, se consignará por diligencia, y en tal caso, el Letrado de la Administración de Justicia mandará que el acto de comunicación se haga por medio de edictos”³⁵.

Se exige que la forma en que se realice este requerimiento sea correo certificado con acuse de recibo, u otros medios complementarios reconocidos

³⁴ PRECIADO DOMÉNECH, C.H., “El nuevo procedimiento monitorio laboral”, *Revista Doctrinal Aranzadi Social*, núm. 11, 2012, pág. 19.

³⁵ CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., “El proceso monitorio laboral”, *Relaciones laborales*, núm. 1, tomo 1, 2013, pág. 11.

en los arts. 56 y 57 de la LRJS (telégrafo, télex, fax, correo electrónico u otros sistemas de comunicación análogos) o bien, por entrega personal de cédula de notificación, conforme al art. 101, arts. 56 y 57 de la LRJS.

De igual forma, también se exige que se dé traslado del requerimiento al Fondo de Garantía Salarial, al que se le dará diez días, ampliables a otros diez, si manifiesta que es necesario que haga comprobaciones sobre los hechos de la petición inicial, y sobre todo, de la solvencia que tenga la empresa o el empresario demandado³⁶.

³⁶ LIEBANA ORTIZ, J.R., "El nuevo proceso monitorio laboral: una visión de conjunto" *Revista española de Derecho del Trabajo*, núm. 156, 2012, págs. 17-18.

6.5. TERMINACIÓN DEL PROCESO. LAS DIFERENTES MODALIDADES DE FINALIZACIÓN DEL PROCESO EN FUNCIÓN DE LA POSTURA ADOPTADA POR EL DEUDOR ANTE EL REQUERIMIENTO DE PAGO:

Una vez aceptado el monitorio a trámite, y notificado por tanto al deudor monitorio el requerimiento de pago, comienza la fase de culminación del proceso, y este podrá finalizar de diferentes maneras en función de la actitud que tenga el deudor respecto a la actuación procesal iniciada.

Por lo tanto, se establecen diferentes opciones o actitudes del deudor monitorio:

6.5.1. Pago de la deuda.

Puede ocurrir que el empresario acepte el pago de la deuda, para ello se le concede un plazo de diez días, durante estos, el mismo puede pagar directamente al peticionario (en cualesquiera de las formas admisibles legalmente), o bien consignar ante el juzgado o tribunal el total importe de lo reclamado, de esta forma el proceso procederá a ser archivado, siempre previa entrega de la cantidad al demandante (art. 101 c) I LRJS), para constatar esto, se solicitará por parte del órgano judicial, que el trabajador presente un recibí que acredite el hecho de la entrega del importe de los salarios debidos.

Además de esto, *“el auto que ordene el archivo de las actuaciones deberá contener un pronunciamiento sobre costas cuanto las partes hayan decidido asistirse de abogado y graduado social colegiado o procurador cuando el proceso se haya desarrollado ante un órgano judicial radicado en un lugar distinto del domicilio del trabajador, siempre que, de acuerdo con López Sánchez, J. <<el actor probase que se había formulado al deudor un requerimiento de pago fehaciente y justificado, o se le hubiera dirigido demanda de conciliación, con anterioridad a la presentación de la petición*

inicial (art. 395 LEC)>>³⁷”.

Igualmente hay que considerar, que pagar en este momento del proceso, se puede considerar una “suerte” para el deudor, ya que, si atiende en tiempo y forma al requerimiento de pago evitará que se le tache de parte ejecutada en un ulterior proceso laboral de ejecución o que tome el rol de parte demandada en lo que posteriormente es probable que se transforme en un proceso laboral declarativo, en cualquier caso, son procesos en los que deberá servirse de abogado y procurador, que le generarán un gasto adicional, y que además, y en los que además es posible que se acuerden medidas ejecutivas o cautelares en su contra.

“Por ello, debe exigirse que en el decreto en el que el Letrado de la Administración de Justicia, tras constatar la existencia del pago, acuerde el archivo de las actuaciones, debiendo producir dicha resolución, la totalidad de los efectos de la cosa juzgada material con relación a estos aspectos del pago del derecho de crédito”³⁸.

En cualquier caso, la resolución del archivo por pago debiera ser un decreto que, en principio, basándonos en el art. 188.1 LRJS, no podría ser recurrible, pero tras la Sentencia del TC 72/2018 de 21 de junio, este primer apartado del artículo 188 se declara inconstitucional y por lo tanto nulo, permitiendo que la misma si sea recurrible.

Por último, es importante aclarar si en ese proceso, cabe el pago parcial de la deuda, o si por el contrario este tiene que ejecutarse en su totalidad, y, aunque si es cierto que el art. 1169 CC, consagra el principio de indivisibilidad del pago, si que se admite en este caso el pago de parte de la deuda solicitada, reconociéndose así en el art. 101 g) LRJS, que contempla la oposición sólo en cuanto a parte de la cantidad reclamada, y en ese caso el solicitante puede solicitar que el juzgado dicte auto acogiendo la reclamación en cuanto a las cantidades que si reconoce el deudor, este servirá como título

³⁷ LIEBANA ORTIZ, J.R., “El nuevo proceso monitorio laboral: una visión de conjunto” *Revista española de Derecho del Trabajo*, núm. 156, 2012, pág. 18.

³⁸ GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El nuevo proceso laboral: comentarios a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social*, Cizur Menor: Civitas, 2011, págs. 313-314.

de ejecución, y se solicitará mediante simple escrito, sin ser necesario esperar que se resuelva respecto a las cantidades controvertidas³⁹.

6.5.2 Inactividad del deudor ante el requerimiento de pago.

Existe la posibilidad de que el deudor requerido no pague, y tampoco se oponga expresamente al pago de la deuda, es decir, no es suficiente por ejemplo que se limite a recurrir el decreto de admisión a trámite de la solicitud monitoria cuando ya existe un requerimiento de pago. Dicho esto, si ni el empresario (ni el FOGASA) se pronuncian ante el juzgado para pagar o alegar las razones que fundamenten su oposición en tiempo y forma motivada (o en el caso de que si se hubiese formulado oposición pero se hubiese hecho fuera del plazo establecido), *“el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud”* (art. 101.c) II LRJS).

Además de esto, hay que tener en cuenta que no está recogido en la ley que el decreto por el que se da por terminado el juicio monitorio se deba notificar al demandado antes de que se proceda al despacho de ejecución, puesto que se entiende que es en el propio decreto donde se constata la incomparecencia del deudor y es donde se insta al demandante para que pueda promover la ejecución. Por esto, tampoco procede que se permita un nuevo plazo para realizar un pago voluntario en esta fase, ya que en el momento que la ley señala para ello no se realizó⁴⁰.

Este radical efecto ante la inactividad del deudor, reitera *“el alcance exacto de la llamada técnica monitoria”*, que ocasiona, tal y como comentábamos en el párrafo anterior, que el silencio por parte del deudor frente al requerimiento de pago no solo derive en su *“ficta confessio”* o en que pierda la posibilidad de oponerse posteriormente a la reclamación, sino que, provoca

³⁹ PRECIADO DOMÉNECH, C.H., “El nuevo procedimiento monitorio laboral”, *Revista Doctrinal Aranzadi Social*, núm. 11, 2012, pág. 21.

⁴⁰ CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., “El proceso monitorio laboral”, *Relaciones laborales*, núm. 1, tomo 1, 2013, pág 12.

la ejecución coactiva y forzosa del crédito reclamado por el acreedor monitorio, como si la deuda se hubiese reclamado en una sentencia firme de condena de manera irrevocable y definitiva⁴¹, de tal forma que el trabajador que solicito el proceso monitorio laboral, y el empresario afectado por este, *“no podrán pretender ulteriormente en proceso laboral ordinario la cantidad reclamada en el monitorio o la devolución de la que con la ejecución se obtuviere, ya que entendemos que resulta aplicable de forma subsidiaria lo dispuesto en el art. 816.2 LEC.”*⁴²

*“Se piensa así, que el título de ejecución del derecho de crédito impagado no se crea tanto por las alegaciones del primero, cuanto por la inactividad del segundo”*⁴³.

Como señalábamos anteriormente, para iniciar la ejecución la Ley autoriza “la mera solicitud”, por lo que podemos decir que este trámite se ajusta íntegramente al art. 816.1 de la LEC, es decir, no es necesario que se presente una demanda ejecutiva para abrir la fase de ejecución. Y es más, en el ámbito laboral, el propio art. 101 LRJS confirma el auto de despacho de ejecución, conteniendo “la orden general de ejecución”.

*“El despacho de ejecución comportará la transformación del procedimiento en un propio proceso de ejecución, que proseguirá con arreglo a lo dispuesto en la LRJS para la ejecución de sentencias (art. 237 y siguientes LRJS)”*⁴⁴.

Es importante no olvidar los intereses de mora procesal que se prevén en el apartado 2 del art 251 de la LRJS y en el art. 576 LEC que recoge que *“desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero liquida determinará, a favor del*

⁴¹ GARBERÍ LLOBREGAT, J, *El nuevo proceso laboral: comentarios a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social*, Cizur Menor: Civitas, 2011, pág. 314.

⁴² LIEBANA ORTIZ, J.R., “El nuevo proceso monitorio laboral: una visión de conjunto” *Revista española de Derecho del Trabajo*, núm. 156, 2012, pág. 18.

⁴³ GARBERÍ LLOBREGAT, J, *El nuevo proceso laboral: comentarios a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social*, Cizur Menor: Civitas, 2011, pág. 314.

⁴⁴ CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., “El proceso monitorio laboral”, *Relaciones laborales*, núm. 1, tomo 1, 2013, pág. 12.

*acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley”, esto ocurrirá si pasados tres meses desde dicho decreto, el empresario no hubiese saldado íntegramente su deuda con el trabajador, concurriendo en falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, en incumplimiento de la obligación de manifestar bienes o en la ocultación de elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación*⁴⁵.

Por último, cabe señalar que si se podrá formular oposición por parte del empresario respecto al auto de despacho de ejecución, según lo previsto en el art. 239.4 de la LRJS, en el que además de poder alegar la causa mas clara de oposición, que es la falta de notificación del requerimiento inicial de pago, (*“este especial motivo de oposición ha sido interpretado en sentido amplio incluyendo también la falta de traslado al FOGASA”*)⁴⁶ el empresario también podrá alegar las posibles infracciones en que podría estar incurriendo la resolución o el incumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos entre otros⁴⁷.

Ahora bien, *“contra el auto resolutorio de la oposición no procederá recurso de suplicación (art. 101) en relación con el art. 101.1 LRJS)”*⁴⁸.

6.5.3 Oposición total o parcial al pago de la deuda.

En el caso de que el empresario deudor no reconozca la deuda, éste puede presentar oposición ante el requerimiento de pago, como ya habíamos comentado, dispone de un plazo de 10 días desde que se emite el requerimiento para hacerlo, y una vez haya presentado la oposición en tiempo

⁴⁵ LIEBANA ORTIZ, J.R., “El nuevo proceso monitorio laboral: una visión de conjunto” *Revista española de Derecho del Trabajo*, núm. 156, 2012, págs. 18 y 19.

⁴⁶ SALINAS MOLINA, F., *Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social*, LEX Nova, 2011, pág. 886.

⁴⁷ LIEBANA ORTIZ, J.R., “El nuevo proceso monitorio laboral: una visión de conjunto” *Revista española de Derecho del Trabajo*, núm. 156, 2012, pág. 18.

⁴⁸ CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., “El proceso monitorio laboral”, *Relaciones laborales*, núm. 1, tomo 1, 2013, pág. 13.

y forma legalmente establecida, según dice el art. 101 e) LRJS “se dará traslado a la parte actora, que podrá, en los cuatro días siguientes, presentar, ante el Juzgado de lo Social, demanda, en cuyo caso se procederá seguidamente al señalamiento ulterior de los actos de conciliación y juicio en la forma ordinariamente prevista, sobreseyendo en caso contrario las actuaciones”.

Es importante aclarar en este punto que la demanda que puede formular el trabajador, deberá hacerse “en la forma recogida en este mismo artículo”, es decir, con los requisitos mínimos que recoge el artículo 101 a), y no en base a los requisitos generales de una demanda recogidos en el art. 80 LRJS⁴⁹.

“Si no se interpone demanda en 4 días se sobresee el proceso por medio de decreto recurrible en revisión en el plazo de 3 días (art.188.2 LJS)⁵⁰”.

Aclarada una de las opciones de las que dispone el trabajador ante esta negativa, nos centraremos de nuevo en la oposición por parte del deudor, quien además de cumplir el plazo de presentación de la oposición en la Oficina del Decanato de los Juzgados para su reparto al juzgado de procedencia dentro de los 10 días establecidos, deberá hacerlo en la forma legalmente determinada, y esto es que ha de hacerse por escrito, detallando la razón o razones por las que no debe en todo o en parte, la cantidad reclamada, esta oposición debe de estar fundamentada, ya qué, casi de forma unánime, las Audiencias provinciales no aceptarán la negativa de la deuda bajo apreciaciones ambiguas por parte del deudor que no dispongan de una base demostrable, es decir, expresiones tales como “ que lo que se debe no es lo que se reclama” o “que no debe tal cantidad” no serán aceptadas a no ser que contengan motivos concretos que las justifiquen. Así lo recoge la propia LRJS al imponer que se alegue “suscitamente” (art.101 b) y “por escrito y en forma motivada” (art.101 c).

“Además, los más elementales postulados de los principios de defensa y contradicción imponen el deber de no ocultar a la otra parte los fundamentos de

⁴⁹ GARBERÍ LLOBREGAT, J, *El nuevo proceso laboral: comentarios a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social*, Cizur Menor: Civitas, 2011, pág. 315.

⁵⁰ PRECIADO DOMÉNECH, C.H., “El nuevo procedimiento monitorio laboral”, *Revista Doctrinal Aranzadi Social*, núm. 11, 2012, pág. 21.

su pretensión⁵¹”.

En este punto es importante hacer una reseña al Auto núm. 600, de 7 de diciembre de 2009, de la AP León, Secc. 1ª, cuya interpretación del art. 815.1 LEC realiza un estudio en donde se comparan dos corrientes de opinión: Por un lado, todas aquellas resoluciones que han considerado suficiente el mero hecho de que se manifieste una oposición al pago⁵². Y por otro lado, aquellas que por el contrario consideran que ha de exigirse un fundamento de por qué no debe afrontar el pago⁵³.

Se inclina la balanza hacia esta segunda opinión si concluimos con la cita del Auto de la AP Badajoz, Secc. 3ª, e 6 de julio de 2009: *“La exigencia de que se expongan “sucintamente” esas razones no es gratuita, responde al principio de buena fe procesal”* (art. 11 LOPJ) y con el art. 247.1 LEC, que impone a las partes el deber de no ocultar a la contraria los fundamentos de su pretensión⁵⁴.

Esto nos lleva a reseñar los motivos por los que cabe oponerse al pago, y puesto que la ley no limita alguno en particular, observamos que: *“Cabrán tanto de fondo: falta de legitimación, causas de extinción: pago, compensación, condonación...; hechos excluyentes: extinción; hechos impeditivos: nulidad de la obligación por vicios del consentimiento, etc.; como motivos procesales: improcedencia del monitorio por la cuantía, falta de jurisdicción o competencia, falta de capacidad para ser parte, etc.”*⁵⁵.

Se podrán alegar todas las excepciones que se recogen en el art. 85.2

⁵¹ CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., “El proceso monitorio laboral”, *Relaciones laborales*, núm. 1, tomo 1, 2013, pág. 13.

⁵² Autos de la AP Cáceres, Secc. 1ª, de 8 de julio de 2009, de la AP Jaén, Secc. 2ª, de 9 de noviembre de 2005, de la AP Valladolid, Secc. 1ª, de 23 de octubre de 2007 y de la AP Barcelona, Secc. 19ª, de 18 de noviembre de 2008.

⁵³ Autos de la AP La Rioja, Secc. 1ª de 15 de mayo de 2009, de la AP Badajoz, Secc. 3ª, de 6 de julio de 2009, de la AP Castellón, Secc. 3ª de 12 de junio de 2009, de la AP Orense, Secc. 1ª de 12 de mayo de 2009, de la AP Córdoba, Secc. 1ª de 27 de Mayo de 2009, de la AP Tenerife, Secc. 1ª de 20 de marzo de 2009, entre otras.

⁵⁴ LA HUERTA, M.A., “La oposición al requerimiento en el proceso monitorio”, *Diario La Ley*, Sección Tribuna, 2014, pág. 4.

⁵⁵ PRECIADO DOMÉNECH, C.H., “El nuevo procedimiento monitorio laboral”, *Revista Doctrinal Aranzadi Social*, núm. 11, 2012, pág. 22.

para los procesos declarativos, pero se ha de destacar que los motivos en los que se apoye el deudor para defender su oposición, serán los que se mantengan en un posible juicio posterior, impidiendo que se añadan nuevas alegaciones, lo que hace que nos fijemos en la estrecha vinculación existente entre el monitorio y el juicio civil⁵⁶, ya que no se pueden considerar como dos procesos autónomos, puesto que se entiende que el juicio civil es la continuación del monitorio, ya que con él se crea también una vinculación para las dos partes afectadas en el monitorio, porque como ya hemos dicho, el empresario no podrá añadir alegaciones, pero el trabajador tampoco podrá variar los alegatos que expuso para iniciar el proceso, por lo tanto variará su tramitación pero “manteniéndose las partes, el objeto del pleito y la misma competencia funcional y territorial del juzgado que empezó a conocer de la reclamación”⁵⁷.

Otra opción es que el empresario deudor reconozca solo una parte de la deuda, así se contempla en el art. 101 g) LRJS, ante esto, se permite que el actor solicite al Letrado de la Administración de Justicia que dicte Auto donde se recojan las cantidades que si sean reconocidas, lo que sirve de título para ejecutar esa parte de la deuda sin necesidad de esperar a que se resuelva respecto a las cantidades que el deudor no reconoce⁵⁸.

Por lo tanto, llegados a este punto, existen dos opciones una vez presentada la oposición por parte del deudor: Si en el plazo de los cuatro días posteriores el actor no presenta demanda se precederá a sobreseer las actuaciones, sobre esto dispone el art. 136 de la LEC, que transcurrido el plazo, se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto del que se trate⁵⁹. Y si por el contrario el actor si presentase la demanda dentro de tiempo, como ya hemos comentado anteriormente el asunto se resolvería por el

⁵⁶ CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., “El proceso monitorio laboral”, *Relaciones laborales*, núm. 1, tomo 1, 2013, pág 13.

⁵⁷ SAP Valencia 17 de octubre de 2011 (nº rec. 448/2011).

⁵⁸ LIEBANA ORTIZ, J.R., “El nuevo proceso monitorio laboral: una visión de conjunto” *Revista española de Derecho del Trabajo*, núm. 156, 2012, pág. 19.

⁵⁹ CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., “El proceso monitorio laboral”, *Relaciones laborales*, núm. 1, tomo 1, 2013, pág. 14.

proceso ordinario. En definitiva, en cualquiera de los dos casos, el proceso monitorio finalizará de una u otra forma.

6.5.4 Insolvencia y concurso.

Puede ocurrir que, con posterioridad a haberse iniciado el proceso monitorio, el empresario se declare insolvente o entre en concurso, para este supuesto el art. 101 LRJS contempla que el auto de despacho de ejecución servirá de título bastante, a efectos de hacer efectiva la garantía salarial frente al Fondo de Garantía Salarial, de esta forma, el hecho de que exista una insolvencia salarial sobrevenida no anula la protección salarial.

Teniendo en cuenta el régimen de “inexpugnabilidad”, aunque técnicamente dicho auto carezca del efecto de cosa juzgada frente al FOGASA, la ley excluye que exista un litigio ulterior entre empresario y trabajador, que tenga un idéntico objeto, sin perjuicio de la naturaleza salarial o indemnizatoria de la deuda, y de los demás requisitos existentes en el expediente administrativo oportuno frente a la institución de garantía, en su caso. (art. 101 d))⁶⁰. Es decir, que ni el trabajador podrá iniciar un procedimiento posterior reclamando la cantidad objeto de la petición monitoria existente, ni el empresario solicitar que se le devuelva lo que pago tras el despacho de ejecución.

⁶⁰ LIEBANA ORTIZ, J.R., “El nuevo proceso monitorio laboral: una visión de conjunto” *Revista española de Derecho del Trabajo*, núm. 156, 2012, pág. 19.

7. CONCLUSIONES FINALES.

El proceso monitorio laboral no es más que una adaptación al ordenamiento procesal laboral de un proceso que ya existía en nuestro orden civil, y que, dado su buen funcionamiento, se consideró que podría ser una buena herramienta para afrontar el colapso que empezaba a generarse en los juzgados de lo social en cuanto al volumen de reclamaciones de cantidad que se presentaban, puesto que el número de estas se incremento en gran medida con la crisis económica que a día de hoy aún estamos atravesando. Esta visión respecto al buen funcionamiento del proceso monitorio la encontramos reflejada en otros estudiosos de la materia, como por ejemplo Díez-Picazo Giménez, que sostuvo que “ el proceso monitorio es una de las instituciones más importantes de la LEC y la instauración del mismo en nuestro ordenamiento es una de las principales novedades y uno de los grandes logros de la LEC”⁶¹.

Son muchos los puntos que se pueden considerar positivos dentro de este proceso, pero por sintetizar destacaré los siguientes:

- El motivo principal por el que se entiende que este proceso descongestiona en parte el trabajo de los juzgados de lo social, es porque la intervención en él de la autoridad judicial es prácticamente inexistente, ya que, tanto de la admisión a trámite de la misma, de realizar el requerimiento de pago, y de, en tal caso, dar por finalizado el proceso, se encargará con carácter general el Letrado de la Administración de Justicia y no un juez o tribunal.
- Las limitaciones cualitativas, cuantitativas y formales a las que se ve sometido este proceso también contribuyen a su rapidez, en cuanto a que se acotan los derechos reclamables por esta vía. Siendo posible reclamar únicamente las deudas económicas derivadas de una relación laboral entre empresario y trabajador, cuyo importe no exceda de los seis mil euros, estén reconocidas y vencidas en el tiempo, y que

⁶¹ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. *Derecho Procesal Civil. Ejecución forzosa. Procesos especiales*, 3ª ed. EURA, 2005, Pág. 487.

además pueda acompañarse de los documentos que solicita la ley.

- Relacionado con el punto anterior, también considero importante destacar la sencillez de este proceso en cuanto a los trámites en sí, ya que, los documentos fijados por parte del legislador para realizar la solicitud monitoria no requieren formalidad ni certificado de autenticidad ninguno, es decir, con que el trabajador presente la solicitud debidamente cumplimentada, y adjunte los documentos que se solicitan (sean ciertos o no), será suficiente para que la petición monitoria sea admitida a trámite.

- Igualmente destacable en este proceso, es la inmediatez con la que se desarrolla, ya que, tal y como comentaba en el párrafo anterior, debido a su sencillez, su admisión a trámite no se dilata en el tiempo, al igual que una vez admitida, la misma puede verse resuelta en 10 días, que es el plazo estipulado legalmente para que el empresario deudor se oponga, y de no hacerlo, el proceso se archivará y finalizará previo pago de la deuda. Igualmente, si en ese tiempo el empresario se opone al pago, se establece un plazo de 4 días para que el acreedor inicie demanda por el proceso ordinario, terminando de esta forma igualmente el proceso monitorio; y que, de no interponerla el acreedor, también se sobreseerá el proceso por medio de decreto. De cualquier forma es un proceso que no se extiende en el tiempo.

- Por último, considero de gran importancia el hecho de que para presentar una solicitud de proceso monitorio no sea necesario que el trabajador sea representado legalmente, es decir, que las partes puedan comparecer por sí mismas favorece la no indefensión de los trabajadores, que frente a algunas reclamaciones no podrían permitirse costearlas si tuviesen que incurrir en gastos de este tipo para hacerlas.

Por todo ello, aunque si es verdad que una parte de la doctrina no esta de acuerdo en que el proceso monitorio laboral suponga un avance en la tramitación de este tipo de reclamaciones, basándose en que gran parte de

ellas se verán avocadas a presentar una demanda ordinaria tras la oposición del deudor, retrasando de esta forma el proceso, considero que muchas otras no podrán ser defendidas por parte de los empresarios, resarciendo en un corto periodo de tiempo el derecho de crédito otorgado al acreedor, e igualmente, todos esos procesos que lleguen a buen término por esta vía no tendrán que ser tramitados por la vía judicial, siendo no sé si en gran o al menos en parte, una forma de descongestionar el volumen de trabajo de estos.

8. BIBLIOGRAFÍA

GARBERÍ LLOBREGAT, J., El nuevo proceso laboral: comentarios a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, Cizur Menor: Civitas, 2011.

FOLGUERA CRESPO, J.A., Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LEY 19110/2011), Lex Nova, Valladolid, 2011.

SALINAS MOLINA, F., Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, LEX Nova, 2011.

MONTOYA MELGAR, A., Comentarios al artículo 20” en Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, Aranzadi, 2003.

NOGUEIRA GUASTAVINO, M., GARCÍA BECEDAS, G., Lecciones de Jurisdicción Social, Tirant lo blanch, 2013.

DE LA OLIVA SANTOS, A., DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. y VEGAS TORRES, J., Derecho procesal civil. Ejecución forzosa. Procesos especiales , 3ª ed., EURA, Madrid 2005.

PRECIADO DOMÉNECH, C.H., “El nuevo procedimiento monitorio laboral”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 11, 2012.

CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., “El proceso monitorio laboral”, Relaciones laborales, núm. 1, tomo 1, 2013.

LIEBANA ORTIZ, J.R., “El nuevo proceso monitorio laboral: una visión de conjunto” Revista española de Derecho del Trabajo, núm. 156, 2012.

LA HUERTA, M.A., “La oposición al requerimiento en el proceso monitorio”, Diario La Ley, Sección Tribuna, 2014.